

Brasil: ¿Post-democracia o neo-dictadura?

Brazil: Post-democracy or neo-dictatorship?

Resumen: El artículo analiza la situación del régimen político de Brasil después del golpe que derrocó a la presidente Dilma Rousseff y puso en poder un nuevo gobierno, que implementa un proyecto de acelerado retroceso en los derechos y en las políticas sociales. El gobierno reformista de Rousseff y de su predecesor han aplicado un programa cauteloso, centrado en la lucha contra la pobreza extrema y en la ampliación de las posibilidades de movilidad social, sin poner en cuestión los intereses de las clases dominantes. Aun así, causaron tensiones y provocaron una reacción conservadora. El caso de Brasil muestra lo estrechos que son los límites de la política democrática que imponen los grupos privilegiados. También muestra que, reducida incluso a su dimensión formal, la democracia puede generar sorpresas que perturban el juego de las clases dominantes. Y demuestra, por último, que la institucionalidad en vigor, a pesar de que se presente como democrática, no es neutral: cuando es necesario, rompe sus propias reglas para mantener las jerarquías sociales y las estructuras de privilegios.

Palabras-clave: Brasil, golpe de 2016, Partido de los Trabajadores, democracia.

Abstract: The article discusses the status of the Brazilian political regime, following the coup that deposed President Dilma Rousseff and the inauguration of a new government, which implements a project of accelerated regression in rights and social policies. Rousseff's and her predecessor's reformist governments have applied a cautious program, focused on combating extreme poverty and expanding the possibilities of social mobility without defying the interests of the ruling classes. Even so, they caused tensions and provoked a conservative reaction. The Brazilian case shows how narrow are the limits imposed on democratic politics by privileged groups. It also shows that, even reduced to its more formal dimension, democracy can generate surprises that disorganize the game of the ruling classes. And it shows, finally, that the existing institutional order, even if presented as democratic, is not neutral: when necessary, it breaks with its own rules to maintain social hierarchies and structures of privileges.

Keywords: Brazil, 2016 coup d'état, Worker's Party, democracy.

Fecha de recepción: 20 de julio de 2017

Fecha de aceptación: 19 de septiembre de 2018

Brasil: ¿Post-democracia o neo-dictadura?¹

Luis Felipe Miguel*

La caída de la presidente brasileña Dilma Rousseff, en mayo y agosto de 2016, tras un proceso fraudulento de impedimento, fue – por el peso económico y político del país – el episodio más importante de la sucesión de reveses sufridos por los regímenes nacional-progresistas de Latinoamérica en los últimos años. A pesar de la moderación casi exasperante de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y su permanente disposición para hacer concesiones y acomodar intereses, una coalición de grupos poderosos decidió suspender la vigencia de las normas de la democracia electoral e invalidar la expresión de la voluntad popular, que había escogido a Rousseff menos de dos años antes. El nuevo gobierno puso en práctica inmediatamente un programa de retroceso en los derechos, en detrimento sobre todo de la clase trabajadora y de las mujeres, de retracción de los gastos sociales y de desnacionalización de la economía.

Al igual que en casos semejantes (Honduras y Paraguay), la destitución de la presidente siguió – en líneas generales – los ritos previstos en la ley. En ocasiones, se pasaron por alto plazos y hubo episodios en los que se ultrapasaron algunos límites, como la grabación y divulgación ilegal de llamadas telefónicas de Rousseff, pero las fuerzas armadas no tuvieron participación activa y el impedimento fue decidido por el Congreso, según los trámites determinados por la Constitución. La obediencia a la formalidad sirve para que los nuevos dueños del poder garanticen que no hubo ningún quiebre y que sigue la democracia.²

Creo, al contrario, que Brasil sufrió un golpe, esto es, una situación de fuerza en la que algunos sectores del aparato de Estado cambiaron las reglas para su propio beneficio. Solo que, esta vez, los protagonistas no fueron los militares y sí otras ramas del aparato represivo (la procuraduría, el poder judicial) y el Congreso. La cuestión que se presenta tiene que ver con la naturaleza del régimen que se inaugura con la deposición de la presidente Dilma Rousseff. La Constitución no fue revocada, pero su vigencia efectiva es incierta. Las elecciones permanecen, pero se sabe que sus resultados sufren la tutela de los grupos dominantes. Hay una escalada represiva, pero las libertades civiles aún pueden ser invocadas. En este escenario, ¿aún es posible hablar en democracia?

En la primera parte de este texto, hago una breve reconstitución de la construcción del orden democrático en Brasil, tras el fin de la dictadura civil-militar que empezó en 1964, destacando los gobiernos reformistas del PT. En la sección siguiente,

¹ Agradezco a Lucía Tennina por la revisión de la traducción al castellano de este texto.

* Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Brasil. E-mail: luisfelipemiguel@gmail.com

² Los más cínicos pueden hablar de una “pausa democrática” para el “arreglo” de las instituciones, como ha dicho un exministro de la corte suprema brasileña.

discuto el crecimiento de la polarización política, el impedimento de Rousseff y el proyecto antipopular del gobierno que emergió del golpe. La tercera parte analizo, a partir de una concepción normativa relativamente poco exigente de democracia, cómo se puede clasificar el Brasil de hoy. La conclusión, finalmente, cuestiona los posibles caminos para la reconstrucción de una democracia inclusiva en el país.

De la transición al “lulismo”

La dictadura en Brasil duró más de 20 años. Los conservadores enfatizan su carácter relativamente suave en comparación con las de Argentina, Uruguay y Chile – no fue una dictadura, sino una “dictablanda”, ha dicho el dueño de un importante periódico de San Pablo. Ese cómputo de muertos, torturados y desaparecidos tiene como única función minimizar el horror de la represión política. Lo más importante es indicar que, por su larga duración y por algunos rasgos del orden que creó, la dictadura brasileña tuvo un impacto en la cultura política quizás mayor que sus congéneres de otros países de Latinoamérica. En particular, el hecho de que, salvo en momentos excepcionales, mantuvo el Congreso abierto y la realización de elecciones. Uno y otras bajo el tacón de los jefes militares, que cambiaban reglas, decidían quiénes podrían o no concurrir y anulaban mandatos si los electos los desagradaban. Esto es: se formó una nueva élite política, para la cual es “normal” que la competencia política sea tutelada por los dueños del poder.

La transición fue larga. Las fuerzas armadas empezaron a discutir “estrategias de descompresión política” en 1973 y pasaron el poder a un civil doce años después, preservando muchas salvaguardias. Los crímenes de la dictadura nunca fueron castigados y sus apoyadores fueron integrados sin máculas al nuevo orden político – basta decir que el jefe del primer gobierno civil, que asumió tras la muerte del presidente que no llegó a ser investido en el cargo, había sido, hasta nueve meses antes, el líder del partido de sustentación del régimen autoritario.

Los marcos principales de la transición son la devolución de la presidencia a los civiles (1985), la promulgación de una Constitución democrático-liberal (1988) y la realización de elecciones directas para presidente (1989). La Constitución, fruto de un año y medio de debates, con intensa presión de los diversos grupos sociales, acabó siendo un documento de compromiso, que no agradó plenamente ni a conservadores ni a progresistas. Fue escrita aún bajo el empuje de las luchas por la democratización, en las cuales la defensa de las libertades y del Estado de derecho iba junto a la denuncia de las desigualdades y la búsqueda por justicia social.

Pero, en ese momento, ya cambiaban los vientos internacionales. La Constitución, promulgada en 1988, es contemporánea de la debacle del “socialismo real” y del avance del ultraliberalismo. En 1989 cayó el muro de Berlín; en 1991, la Unión Soviética se disolvió. Aunque gran parte de la izquierda no estuviera guiada por el modelo soviético, ni considerase que encarnaba un verdadero socialismo, la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría se presentó como prueba de las virtudes del mercado y de la necesidad de reducir el papel del Estado. Mientras circulaban fantasías del “fin de la historia”, con el mundo congelado en el capitalismo liberal por toda la eternidad, la creencia en la ineficiencia estatal y las ventajas de la competencia desregulada se convirtieron en dogmas. También en Brasil el registro dominante del discurso político cambió rápidamente. Los proyectos de la izquierda entraron en reflujo.

Así, el texto de la Constitución no significó la consolidación de los derechos sociales ya conquistados y un punto de partida para nuevos logros. Se convirtió en algo a ser defendido contra amenazas reales de retroceso – los cambios más importantes sugeridos apuntaban hacia la reducción, no hacia la expansión, de su potencial para promover una mayor justicia social.

Los primeros gobiernos electos estuvieron alineados con esa *démarche* neoliberal. Con Fernando Collor (electo en 1989) y Fernando Henrique Cardoso (electo en 1994 y reelecto en 1998), se dio la “apertura” de la economía a la inversión extranjera, privatizaciones, retracción de salarios, debilitamiento de los sindicatos. Pero, en las elecciones de 2002, ganó la presidencia un veterano líder operario, Luís Inácio Lula da Silva, cuyo partido, el PT, llevaba la fama de ser “radical” e incluso “anti-sistémico”. La democracia brasileña pasaba por el test de la alternancia en el poder.

El PT surgió en 1980, como una confluencia de grupos que juzgaban que, al contrario de lo que predicaban los partidos comunistas tradicionales (entonces aún en la clandestinidad), las clases trabajadoras no debían seguir subordinadas a los sectores burgueses que se oponían a la dictadura. Participaron de la fundación del partido los llamados “nuevos sindicalistas”, responsables por la retomada de la movilización obrera en Brasil, en los años anteriores, y también viejos militantes de la izquierda, muchos de los cuales habían sido derrotados en la lucha armada contra el régimen militar, y católicos progresistas asociados a la Teología de la Liberación. Un grupo eclético, que tenía en común la idea de encontrar nuevas maneras de hacer política y de hacer del partido un instrumento al servicio de los movimientos populares. Pero los incentivos propios del sistema político hicieron que el PT cambiara a lo largo de su trayectoria.³

Un momento crucial de transformación del partido ocurrió en las elecciones presidenciales de 1989, las primeras después de la dictadura. En una competencia muy pulverizada, con 22 candidatos, Lula, con 17% de los votos válidos, llegó a la segunda vuelta y vio la presidencia al alcance de la mano. Obtuvo 47% de los votos en la etapa final, tras una campaña durísima.

¿Cuáles fueron las consecuencias para el PT? Primero, gracias a la elección, Lula y su partido pasaron a ser las voces principales de la oposición al gobierno del ganador, Fernando Collor; y por ende se convirtieron también en el eje principal de la izquierda brasileña. Si, en vez de Lula, hubiese llegado a la segunda vuelta el veterano líder “populista”, Leonel Brizola, que quedó menos de medio punto porcentual atrás, quizás hubiera sido otra la historia. Segundo y más importante, el casi suceso de 1989 dio un fuerte incentivo para que el PT se volviese un partido electoral. Parecía claro que un buen uso del clima político, combinado con un *marketing* electoral competente, proporcionaría un acceso más rápido al poder que el trabajo de movilización popular en que el partido apostaba desde su fundación.

Lula perdió las dos elecciones siguientes, en 1994 y 1998, antes de finalmente conquistar la presidencia en 2002. En cada una de esas campañas, el PT avanzó hacia una mayor moderación del discurso y un arco de alianzas más amplio. La campaña victoriosa fue conducida por un publicitario conocido por sus vinculaciones con líderes de la derecha; el vice-presidente era un grande capitalista, afiliado al Partido Liberal;

³ Hay una extensa literatura sobre el PT y los cambios que sufrió en su historia. Ver Samuels, 2007; Keck, 1991; Amaral, 2003; Ribeiro, 2010; Meneguello, 1989; Hunter, 2010; Terron y Dillon Soares, 2010.

corporaciones nacionales y extranjeras donaron dinero para la campaña. Lula dijo que su filosofía era “paz y amor”, una manera de señalar que no pensaba más en lucha de clases. Su horizonte había pasado a ser la “igualdad de oportunidades” liberal (Miguel, 2006).

Los sectores de la izquierda hablaron de “capitulación” o de “traición”, pero creo que es posible presentar una apreciación más matizada. Al fin y al cabo, mantenerse en el principismo también puede ser muy cómodo. Sí, Lula y el PT aceptaron los incentivos del sistema político para la acomodación y la moderación, pero entendiendo que era la manera de lograr algún progreso, en circunstancias en las cuales una transformación radical no era factible y las urgencias de los más pobres y excluidos eran notables. Lula quiso entrar en la elección para ganar porque una cuarta derrota, por más heroica y limpia que fuera, representaba quedarse sin los medios para hacer cambios, aunque limitados, a favor de los más pobres. El príncipe maquiavélico está dispuesto a sacrificar su alma inmortal por la grandeza del Estado; el PT sacrificó su pureza por la transformación efectiva posible. En resumen, hay una cierta nobleza en su oportunismo.

En el poder, el PT fue coherente con la moderación exhibida en la campaña. No afrontó los intereses dominantes y, en particular, mantuvo la elevadísima rentabilidad del capital financiero. Pero garantizó políticas de combate contra la pobreza extrema, como un gran programa de transferencia del salario (el “Bolsa-Familia”), la extensión de la luz eléctrica a las comunidades que aún no la tenían, una extensa inversión en viviendas populares e incluso la ampliación del acceso de los más pobres a la educación superior. Lula parecía estar produciendo una versión del “pacto socialdemócrata” europeo, pero adaptada a una sociedad con expectativas muy bajas de igualdad material. A cambio de la estabilidad de la acumulación, las clases dominantes permitirían la erradicación de la miseria. Para muchos analistas, los gobiernos del PT habían elevado la política brasileña a un nuevo nivel y las políticas de inclusión social no serían más dispensables, fuera quien fuera el grupo dirigente (Singer, 2013).

Sin embargo, una diferencia esencial separaba el pacto de los gobiernos “petistas” de la experiencia socialdemócrata. Esa última se basaba en la capacidad de movilización de la clase trabajadora, organizada en fuertes sindicatos. Por su parte Lula presentó la *desmovilización* de los sectores populares, en primer lugar de la clase obrera, como prueba de sus “intenciones serias” de mantener la transformación social en los estrechos límites que las clases dominantes brasileñas aceptaban. Ése era el acuerdo: paz social a cambio de mejoría en las condiciones de vida de los miserables. La nueva estrategia del PT incorporaba la idea de que los beneficiarios de sus programas sociales garantizarían la masa de votos necesarios para su permanencia en el poder. De hecho, en las presidenciales de 2006, 2010 y 2014, la victoria de debió al apoyo masivo en las regiones más pobres de Brasil. En ese modelo, la participación política empezaba y terminaba en el derecho de voto; la idea subyacente era que las instituciones de la democracia competitiva eran irrevocables. Cuando esas instituciones claudicaron, el PT no contaba con sectores organizados a quienes hubiera podido recurrir.

Rotura y retroceso

En junio de 2013, grandes manifestaciones se apoderaron de las calles de las ciudades brasileñas. Primero, el tema era la llamada “movilidad urbana” – fueron organizadas por el Movimiento Pase Libre, que lucha por la gratuidad del transporte colectivo. En seguida, pasaron a reclamar por mejorías en los servicios públicos en general, protestando contra la inversión de dinero en la preparación de los mega-eventos

(la Copa del Mundo de fútbol de 2014, las Olimpiadas de 2016), en detrimento de la educación o de la salud. Las protestas indicaron que una buena parte de los sectores populares urbanos no estaban tan satisfechos con los gobiernos petistas como, hasta entonces, casi todos creían.

La derecha vio en las protestas una oportunidad de debilitar el gobierno e impedir la reelección de Dilma Rousseff. Dejó de hostilizarlas, como había hecho al comienzo, y adhirió a ellas, siempre cambiando su significado. Los medios masivos de comunicación, que antes hablaban de los “vándalos” y presentaban a las manifestaciones como amenazas al orden público, pasaron prácticamente a convocarlas, interrumpiendo su programación para transmitir las en vivo, a veces por horas y horas. Pero ahora eran presentadas como teniendo, como eje principal, la lucha contra la corrupción de los gobiernos del PT.

De hecho, a medida que se adaptó a las prácticas dominantes de la política brasileña, el PT pasó a aceptar también la promiscuidad con el dinero empresarial que es su característica. El financiamiento de las campañas electorales es, en gran medida, retribución por ventajas obtenidas del poder público. El apoyo parlamentario se gana con la distribución de cargos en el Estado y en las empresas de economía mixta, a fin de que cada uno pueda hacer sus negocios con el capital. Hay quienes se enriquecen y hay quienes se limitan a obtener recursos para el partido, pero, con raras excepciones, el éxito en la política brasileña requiere un alto grado de tolerancia a la corrupción. El PT, que siempre se había presentado como crítico de esa política “sucias” y defensor de padrones éticos más elevados, pagó un alto precio por su capitulación, perdiendo el apoyo de muchos sectores urbanos de clase media que hasta entonces tenían simpatía por el partido. Y dejó abierto el flanco para que, en el discurso de sus adversarios, incluso los medios de comunicación, la corrupción pasase a ser presentada como una exclusividad del petismo.

Esa percepción se agudizó con la llamada Operación Lava Jato, una investigación sobre corrupción en la petrolera estatal (Petrobrás), que empezó en 2014 y se desplegó en muchos frentes. Llevada a cabo por un grupo de jueces, promotores y delegados de policía altamente politizados, la Lava Jato generó un clima de opinión favorable a la demonización del PT, en que pese a que los negocios sucios de la petrolera venían de administraciones anteriores, y a la destitución de la presidente Dilma Rousseff, por más que ella jamás haya sido involucrada en las acusaciones.

El gobierno de Rousseff se vio fragilizado en múltiples dimensiones. Las protestas en las calles señalaban que las políticas compensatorias no bastaban más para garantizar su base popular. La Lava Jato y los medios de comunicación mantenían al gobierno acosado por denuncias. Al mismo tiempo, la presidente intentó cambiar algunos aspectos del pacto que había heredado de Lula, generando nuevas oposiciones. Buscó reducir las ganancias del capital financiero, a favor de la inversión productiva, en una batalla sobre la tasa de interés que terminó perdiendo (Singer, en Singer y Loureiro, 2016). Y trabajó para desalojar algunos de los operadores de los esquemas de corrupción de las empresas estatales, incluso la propia Petrobrás. Al inicio de su gobierno, la señal era que la política podía continuar “sucias” (esto es, basada en el cambio de apoyo por cargos), pero el gobierno tenía que ser “limpio” (sin corrupción). Esto desagradó a buena parte de la élite política que se había acomodado con los gobiernos del PT.

A pesar de todos esos problemas, Rousseff obtuvo un nuevo mandato en las

elecciones de octubre de 2014. Para la derecha, el resultado fue un balde de agua fría. Pareció la demostración final de que jamás lograrían reconquistar el poder por medio del juego electoral. Empezó ahí la definición de que la presidente debía ser retirada del poder, fuera por la anulación de las elecciones, fuera por un proceso parlamentario de impedimento. En un caso u otro, se cumplirían los rituales legales, con las decisiones tomadas por las instancias competentes – justicia electoral o Congreso Nacional. Pero la obediencia aparente a la letra de la ley apenas escondería que no se respetaba su espíritu, dado que no había hechos para sustentar una condena. Lo que corresponde al *script* de los nuevos tipos de golpes que en el siglo XXI vienen ocurriendo en países de Latinoamérica.

Para impedir el golpe, Dilma Rousseff adoptó la respuesta estándar de los gobiernos del PT: cedió aún más. Amplió la cuota de los partidos conservadores en su ministerio y, en contradicción flagrante con sus promesas de campaña, adoptó un ajuste recesivo profundamente dañino para la clase trabajadora. Con eso, perdió el apoyo de su propia base, que se movilizó poco y tardíamente para la defensa del gobierno. Al mismo tiempo, la evidente fragilidad de Rousseff devaluaba su principal moneda de cambio: era necesario conceder pedazos cada vez mayores del aparato de Estado para obtener un apoyo parlamentario cada vez más vacilante.

El derrocamiento de la presidente Dilma Rousseff, en mayo (destitución provisoria) y agosto (definitiva) de 2016, representó, en sí mismo, una demostración de que las reglas de la democracia electoral estaban suspendidas en Brasil. Una gobernante que había ganado las elecciones podría ser removida si una coalición de grupos poderosos – en el parlamento, en el Poder Judicial, en los medios de comunicación, en las grandes empresas – no la quería más. Ese quiebre es ya grave, una vez que el voto es la última afirmación del principio de la soberanía popular, en sociedades donde el pueblo puede ser “la fuente” del poder, pero decididamente no gobierna. De una perspectiva democrática radical, es posible afirmar que el voto es insuficiente. Sin embargo, respetarlo es necesario.

La salida de Rousseff puso el Poder Ejecutivo en las manos de su vice, Michel Temer, un viejo político oportunista cuya presencia en la fórmula presidencial sería el precio a pagar por la “governabilidad”. Y ahí el golpe de Estado mostró a que había llegado. En pocos meses, Temer promovió un enorme retroceso, que puede ser sistematizado en tres dimensiones.

(a) Retroceso en los derechos sociales. La primera prioridad del nuevo gobierno fue aprobar una emenda a la Constitución determinando que el gasto público no puede ser ampliado – sólo reajustado según la inflación oficial – por veinte años. Como otros instrumentos legales, empezando por la Ley de Responsabilidad Fiscal, de 2000, que los gobiernos del PT mantuvieron, conceden prioridad al pago de la deuda pública por sobre la inversión social, la emenda producirá una retracción en los servicios de educación y salud. La retirada de derechos laborales (con la definición de que acuerdos colectivos podrán revocar conquistas asignadas en la ley, como la jornada de ocho horas) y una reforma de las jubilaciones que las coloca fuera del alcance de los brasileños más pobres son dos otras prioridades del gobierno. Ninguna de esas medidas jamás contó con la aprobación popular y es difícil imaginar que gobernantes que le prestan cuentas a la población se dispusiesen a implantarlas, en especial de una manera tan cruda.

(b) Retroceso en las igualdades ciudadanas. A pesar de contradicciones y de los

muchos problemas que permanecieron, los años de vigencia de la Constitución fueron de avance en la condición de las mujeres, de la población negra y de *gays*, lesbianas y travestis, sea por el reconocimiento de sus derechos, sea por la existencia de políticas gubernamentales a su favor. El gobierno que nació del golpe empezó por retirar a las mujeres de los cargos más altos de la administración; su discurso público enfatiza que ellas son las responsables por el hogar y que ésa es su principal tarea. De hecho, con la retracción de los servicios públicos, aumenta el peso de lo que debe ser provisto en el hogar, eso es, por mujeres no pagadas. Programas de promoción de la igualdad racial o de combate a la homofobia están en riesgo de discontinuación. La educación fue reformada, por medio de un instrumento legislativo de urgencia, para disminuir el peso de las humanidades y mantener las clases populares en cursos de carácter más técnicos, enfocados en la preparación de mano de obra para el mercado de trabajo.

(c) Retroceso en las libertades. Desde las manifestaciones de junio de 2013, aún en el gobierno de Dilma Rousseff, hay una escala de la represión policial contra los movimientos populares, que creció después del golpe de 2016.

En Brasil, la mayor parte del trabajo policial se hace por corporaciones bajo control de los gobiernos de los estados federados, incluso la “manutención del orden público”, donde se ubica la represión a manifestaciones en las calles. Los principales de esos gobiernos estaban en manos de la oposición de derecha, pero incluso donde gobernaba el PT, hubo una ampliación de la truculencia de la policía. Además, gracias a la llamada “ley antiterrorismo”, también los órganos del gobierno central estuvieron involucrados en la represión a movimientos populares, desde el gobierno Dilma Rousseff. Ése es un importante elemento para comprender que el golpe fue en parte un quiebre, pero en parte el agravamiento de tendencias que venían desde antes y que se ligan a la percepción de que el conflicto de clases se estaba agudizando en Brasil.

En el proceso de destitución de la presidente, la represión creció, con una parcialidad muy perceptible – los defensores del impedimento se sacaban *selfies* con los policías, mientras que los defensores del mandato de Rousseff se enfrentaban a bombas de gas lacrimógeno. Luego de la posesión de su sustituto, los casos de violación de derechos se volvieron aún más frecuentes, con casos como la invasión policial, sin autorización judicial, a una escuela de formación del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra o al campus de la Universidad de San Pablo. En el servicio público, quienes se manifiestan contra el gobierno sufren castigos. Decisiones judiciales imponen censura a críticas al nuevo poder; periodistas de oposición son detenidos. Jueces y procuradores intimidan a profesores y dirigentes escolares que discuten cuestiones “políticas” en escuelas y universidades.

La destitución de la presidente, sin la existencia de razones constitucionales para ello, marcó un quiebre de la democracia en Brasil. Pero no fue un hecho aislado. Fue parte de un proceso más amplio de reversión del orden democrático en el país. No por casualidad, limitación de la democracia y reversión de las políticas de un ciclo de gobiernos (moderadamente) progresistas van por el mismo camino. Lo que el caso brasileño demuestra es la permanente tensión entre la democracia, incluso formal, y las desigualdades sociales, una tensión que se siente en todas partes, pero que se manifiesta de una manera particularmente aguda en los países periféricos.

Los límites de la democracia

La expresión “democracia representativa” es tan común que, en general, no

prestamos atención a la paradoja que ella encierra. Es un “gobierno del pueblo” en que el pueblo no gobierna, dado que delega la toma de decisiones a una minoría de representantes. De hecho, los regímenes democrático-representativos poseen esa ambigüedad en su funcionamiento. Por un lado, la representación sirve de filtro para las reivindicaciones populares, lleva a acuerdos, promueve la moderación; en suma, contribuye a reducir el nivel del conflicto político y frenar las transformaciones sociales. Por otro lado, la elección popular es necesariamente un momento de incerteza (Przeworski, 1984), en particular porque exige una abertura a la voluntad popular que puede, a veces, producir sorpresas que desorganizan el juego político de las élites (Miguel, 2014a).

La estabilidad de ese régimen pasa, así, por un equilibrio entre las imposiciones de los grupos dominantes y las presiones de los dominados. La más perfecta ilustración de tal equilibrio fue el pacto socialdemócrata de los países europeos, en el cual, a cambio del no desafío a la continuidad de la acumulación capitalista, la clase trabajadora ganó el Estado de bien-estar social. Como vimos, la experiencia del gobierno petista en Brasil puede ser comprendida como una versión de ese pacto, con ambiciones muy limitadas, es verdad. En vez de un Estado de bien-estar, lo que estaba en juego era la ampliación del poder adquisitivo de los salarios, que ha sido en la historia política brasileña, desde hace muchas décadas, el punto central de disputa.⁴

Pero los niveles “aceptables” de redistribución, para el capital, no son objetivos, pues

la posición de fuerza de los empresarios o de los inversionistas incluye la capacidad de definir la realidad. Eso significa que aquello que ellos consideran como una carga [de impuestos] insoportable es efectivamente una carga insoportable [...]. El debate sobre el hecho de saber si el Estado “realmente” redujo las ganancias es, por esa razón, puramente académico, pues los inversionistas están en posición de realmente poder producir, por sus propias interpretaciones, un “estrangulamiento de la ganancia” y los efectos que lo siguen. (Offe, 1997: 84-85)

En los países centrales, a partir de fines del siglo XX la burguesía señaló que el pacto era “demasiado” para ella y trabajó para reformular sus bases, en detrimento de los trabajadores. En Brasil, basándonos en la narrativa que he bosquejado antes, fueron los intentos del gobierno Rousseff de mejorar, aunque poco, los términos del acuerdo los que pusieron en marcha la reacción. Y los resultados de las elecciones de 2014, cuando Dilma Rousseff gana a pesar de toda la campaña de desmoralización contra ella, su gobierno y su partido, demostraron el peligro de la democracia, incluso restricta al voto, incluso si la capacidad de presión de los grupos privilegiados forzaba a la presidente reelecta a adoptar medidas contrarias a sus promesas a los votantes.

El golpe de 2016 echó por tierra el arreglo político que ordenaba la disputa política en Brasil, haciendo con que la Constitución de 1988 tenga su vigencia condicionada a qué intereses estarán en juego. Frente a tal escenario, ¿aún es posible hablar de democracia? Las respuestas posibles no se resumen a “sí” o “no”; ellas componen una pendiente. Bajo una perspectiva muy exigente, no podríamos hablar en democracia tampoco para el período anterior. La capacidad de influencia política

⁴ Junto a la cuestión de la reforma agraria, sobre la cual los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff adoptaron una posición muy tímida.

siempre estuvo distribuida de una manera muy desigual, la vigencia de las libertades y de los derechos civiles jamás estuvo garantizada plenamente para la población negra, pobre y de las comunidades periféricas, sujetas al arbitrio policial y con escasa protección de una justicia con claro sesgo de clase y de raza. Si, para quienes miran con los ojos del ideal clásico, todos los regímenes occidentales deberían ser llamados “oligarquías liberales” en vez de “democracias” (Vidal-Naquet, 2002: 14), Brasil añade a la mezcla su desigualdad social gigantesca y la herencia de una sociedad que siempre ha privilegiado las relaciones sociales jerárquicas y autoritarias. Por otro lado, permanecen en Brasil, incluso después del golpe, muchos de los aparatos del régimen representativo liberal, esto es, del régimen que el lenguaje común reconoce como democrático en el mundo contemporáneo, aunque dotados de una efectividad más reducida.

En suma: salimos de una democracia muy insuficiente hacia un orden político aún peor. Dimos pasos en dirección a una dictadura, pero no hemos recorrido todo el camino. Estamos llegando al final de la pendiente, ingresando en el crepúsculo, entre una democracia que ya no es y una dictadura que aún no puede ser. Fue explicitada, una vez más y de manera muy intensa, la tensión presente al largo de la historia de Brasil, que hace incompatible la vigencia de las reglas de la democracia formal y el combate a las desigualdades sociales. Por lo que parece, la única opción para mantener la democracia es desproveerla de cualquier efectividad, auto limitada e incapaz de promover la igualdad que es parte de su propia definición normativa.

La experiencia de PT hace necesario volver a pensar, en primer lugar, la relación entre el proyecto de la izquierda y la democracia electoral (así como la institucionalidad que la rodea). El sufragio universal fue una conquista popular, fruto de mucha lucha contra regímenes liberales que, bajo diversos pretextos, limitaban el derecho al voto a los propietarios, a los hombres, a los blancos. Alimentó el temor (o, para muchos pensadores socialistas, la esperanza) de que los pobres aprenderían a utilizar su fuerza numérica para elegir gobiernos que instaurasen una redistribución radical de la riqueza. Pero la democracia representativa pronto se demostró vulnerable a las diversas desigualdades sociales, acomodándose a ellas.

Esto no significa que el derecho al voto es irrelevante. El voto requiere que los intereses de los dominados sean tenidos en cuenta, aunque marginalmente. A pesar de todas sus limitaciones, hay incluso una cierta pedagogía en el proceso electoral, lo que permite a los más pobres identificar las políticas que los benefician y premiar a quienes las adoptan – y ésta fue la apuesta del PT. Sin embargo, esa pedagogía incluye un entrenamiento para la actividad política de baja intensidad y para la débil movilización popular. En el momento en que el marco institucional vigente se rompe, la capacidad de resistencia, que pasa a necesitar de otras formas de expresión política, se muestra débil.

La apuesta del PT fue en el voto: sus políticas gubernamentales beneficiarían una mayoría de la población y generarían victorias electorales que garantizarían la continuidad del partido en el poder. Es una apuesta que revela una fe ingenua en el funcionamiento de las instituciones, como si ellas pudieran actuar de manera neutra e incorporasen, sin ningún ruido, los valores que afirman defender. Pero las instituciones son “selectivas”, una vez que responden más a algunos intereses y menos a otros. Lejos de ser la encarnación de valores universales, el Estado se presenta como la

materialización de una cierta relación de fuerzas, lo que lleva a concluir que, para los dominados, la tarea es reconfigurarlo a fin de tornarlo menos desfavorable a ellos.⁵ O sea, la institucionalidad tiene lados y cualquier cambio tiene que estar anclado por fuera de ella.

Las elecciones son como un agujero negro de la política, capturando todas las energías y esperanzas de los agentes del mundo social. Ellas venden la ilusión de que la conquista de una eventual mayoría garantiza la transformación del mundo social. En un régimen presidencialista, la presidencia de la república, cumbre de una estructura piramidal de poder, sería el gran objetivo. Pero, como dijo Poulantzas:

La unidad centralizada del Estado no reside en una pirámide, en la cual sería suficiente ocupar la parte superior para asegurar su control. Hay más: la organización institucional del Estado permite a la burguesía transferir el papel dominante de un dispositivo a otro en el caso de que la izquierda, tomando el gobierno, pueda controlar el dispositivo que hasta ahora desempeñó el papel dominante. En otras palabras, la organización del Estado burgués le permite trabajar a través de transferencias y desplazamientos sucesivos, lo que permite el cambio del poder de la burguesía de un dispositivo a otro: el Estado no es un bloque monolítico, sino un campo estratégico (Poulantzas, 2013: 200-205).

El caso brasileño lo ilustra a la perfección. Una coalición de los poderes legislativo y judicial con sectores del propio ejecutivo (policía, procuraduría) neutralizó la presidencia. En otras ocasiones, tal papel fue desempeñado por las fuerzas armadas.

Al mismo tiempo, las elecciones fomentan la competencia interna y el personalismo en el campo popular. La necesaria unidad de fuerzas para detener el golpe es obstaculizada por la disputa sobre composición de la fórmula y por la búsqueda por mantener la identidad frente a los votantes. En Brasil, las elecciones municipales de 2016 tuvieron como efecto líquido retrasar la resistencia contra los retrocesos llevados a cabo por el gobierno golpista y profundizar la desunión entre los partidos de izquierda. Pasada la disputa por las alcaldías, para muchos del campo popular permanece el foco en la campaña presidencial de 2018, como si una victoria de Lula – apuntado por las encuestas como favorito, en el momento en que escribo – o de otro candidato progresista representase un retorno al orden precedente al golpe y como si la realización de la elección significase que la democracia representativa estuviera restaurada. Lo que es otra función de la competencia electoral: promover la “relegitimación” de regímenes que enfrentan la desconfianza de la población (Blanquer y Cheresky, 2004: 17).

El caso brasileño también ilustra, con especial pertinencia, un problema general que es el nudo jamás desatado de la relación entre el capitalismo y la democracia. La posibilidad de la democracia depende de la confrontación permanente con la lógica social del capitalismo, que incluye tanto la desigualdad material como las dinámicas de privatización del mundo, la monetización de las relaciones y la competencia entre las personas. Esta confrontación no es opcional. Si no hay espacio para otras formas de cooperación social, fuera de aquellas orientadas hacia el mercado, la democracia está condenada a ser solamente un barniz institucional de prácticas que nada corresponden a sus ideales. Aquí, una vez más, la opción de los gobiernos del PT, de privilegiar el combate contra la desigualdad por medio de la incorporación al consumo, no puso la

⁵ Para la selectividad de las instituciones ver Offe, 1984. Para la materialización de la correlación de fuerzas, ver Poulantzas, 2013. Para una discusión amplia sobre esa literatura, ver Miguel, 2014b.

disputa sobre el terreno más favorable al avance social.

Conclusión: caminos de democracia en Brasil

La noche que cae en el Brasil se anuncia larga. No se ve, en la coyuntura actual, nada que dé margen a ilusiones. El golpe de Estado de mayo y agosto de 2016 mostró que el movimiento popular y el campo progresista son aún más frágiles de lo que se pensaba anteriormente. Mientras que la coalición regresiva en el poder impone rápidamente su programa anti-popular y anti-nacional, la resistencia apenas se pone de pie. En este momento, todavía no se puede ni siquiera imaginar qué salida se construirá. Es posible que el golpe no tenga fin, que simplemente se deslice hacia una “normalización” cuyos límites sólo se serán conocidos cuando se ponen a prueba, o que se llegue en fin a una transición aún más ambigua y limitada que la que marcó el final de la dictadura militar.

La retirada de la presidente elegida por el voto popular, sin base en la legislación, es grave en sí misma. Esto demuestra que la clase dominante brasileña decidió que ya no vale la pena respetar los rituales de la democracia electoral – que ella asume la prerrogativa de ejercer su tutela sobre lo que dicen las urnas. Esto no es, como el gobierno golpista muestra todos los días, sólo de definir quién ocupa el asiento de presidente. Retirar el poder del voto popular es retirar la expectativa de que los gobernantes respondan, aunque poco, a los intereses de las mayorías. No por casualidad, las reformas que el gobierno Temer está implementando fueron siempre rechazadas cuando el pueblo ha podido dar su opinión.

La reacción en las calles es débil. Los largos años de desmovilización deliberada de los gobiernos del PT están cobrando caro la cuenta. Esto no quiere decir que no haya una creciente insatisfacción con el gobierno que nació del golpe, incluso con la cortina masiva de desinformación que rodea sus acciones. El movimiento obrero cuenta con reducida capacidad de acción, lo que refleja el tipo de relación que las centrales sindicales establecieron con el poder político, pero también los cambios en las relaciones laborales que pusieron a los trabajadores a la defensiva en todo el globo. Al mismo tiempo, en Brasil, hace años ya, hay una cantidad creciente de huelgas “salvajes”, lanzadas sin la participación de los sindicatos. La presencia de una miríada de organizaciones y colectivos de mujeres, del movimiento LGBT, de negras y negros, de las periferias, genera tensiones, una vez que hay una multiplicidad de agendas que precisan ser combinadas, sin que se pueda afirmar más de antemano la primacía del clivaje de clase. Pero tales organizaciones y colectivos son una fuente de insubordinación y de energías transformadoras. El golpe afectó a estos grupos con fuerza; y como, sin dudas, las mujeres no volverán para el hogar, ni los gays y las lesbianas para al closet, ni los negros dejarán de exigir reparaciones por el racismo, son sectores en la vanguardia de la oposición a los retrocesos. En suma, hay insatisfacción con el nuevo orden; lo que hace falta son caminos para que ella no solamente se exprese, sino también produzca efectos políticos concretos.

Para eso, es necesario no reducir la lucha política a su dimensión electoral o incluso institucional. Sin la presión de los movimientos populares, incluyendo los medios no institucionales, los posibles avances son necesariamente limitados y frágiles. El repertorio de acciones de los sectores populares incluye ocupaciones, huelgas, sabotajes, formas de desobediencia civil. El respeto a la institucionalidad puede ser una trampa; a fin de cuentas, los dominantes no están exentos de actuar fuera de las normas establecidas o en sus lagunas, desde la evasión fiscal y la corrupción hasta la utilización

de bandas a sueldo o milicias armadas. Pero también hay muchas formas en las que, en todos los ámbitos de las relaciones cotidianas, el poder del dinero se hace sentir, rompiendo la igualdad que supuestamente imperaría, de manera que no se percibe como transgresora. Como escribió una gran novelista española, “en el capitalismo el dinero no es intercambio, es violencia” (Gopegui, 2014: 157).

La fuerza de esa resistencia ha de determinar el futuro de la democracia en Brasil. Una resistencia débil permite la normalización del golpe, en una democracia meramente formal con salvaguardias que impiden cualquier efectividad de la voluntad popular en el ejercicio del poder. Una resistencia más fuerte llevará, como respuesta, a nuevos pasos en dirección de un régimen abiertamente autoritario. De ella podrá salir una reconstrucción democrática. Pero el nudo de la cuestión permanece sin resolver. No hay democracia, ni siquiera en una versión meramente (pero auténticamente) electoral que pueda convivir con los niveles de desigualdad social a los cuales las clases dominantes brasileñas no renuncian.

Bibliografía

Amaral, Oswaldo E. do (2003). *A estrela não é mais vermelha: as mudanças no programa petista nos anos 90*. Garçon. São Paulo.

Blanquer, Jean-Michel y Cheresky, Isidoro (2004). “Introducción” , en Isidoro Cheresky y Jean-Michel Blanquer (comps.) *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*. Homo Sapiens. Rosario.

Gopegui, Belén (2014). *El comité de la noche*. Random House. Barcelona.

Hunter, Wendy (2010). *The transformation of Workers’ Party in Brazil, 1989-2009*. Cambridge University Press. Cambridge.

Keck, Margaret E. (1991). *PT: a lógica da diferença*. Ática. São Paulo.

Meneguello, Rachel (1989). *PT: a formação de um partido (1979-1982)*. Paz e Terra. Río de Janeiro.

Miguel, Luis Felipe (2006). “From equality to opportunity: transformations in the discourse of Workers’ Party in the 2002 elections”. *Latin American Perspectives*, vol. 33, n° 4, pp. 122-43.

Miguel, Luis Felipe (2014a). *Democracia e representação: territórios em disputa*. Editora Unesp. São Paulo.

Miguel, Luis Felipe (2014b). “Mecanismos de exclusão política e os limites da democracia liberal: uma conversa com Poulantzas, Offe e Bourdieu”. *Novos Estudos*, n° 98, pp. 145-61.

Miguel, Luis Felipe y Machado, Carlos (2007). “Um equilíbrio delicado: a dinâmica das coligações do PT em eleições municipais (2000 e 2004)”. *Dados*, vol. 50, n° 4, pp. 757-93.

Nobre, Marcos (2013). *Choque de democracia: razões da revolta*. Companhia das Letras. São Paulo.

Offe, Claus (1984 [1972]). “Dominação de classe e sistema político: sobre a seletividade das instituições políticas”, en *Problemas estruturais do Estado capitalista*. Tempo Brasileiro. Río de Janeiro.

Offe, Claus (1997 [1984]). “De quelques contradictions de l’État-providence moderne”, en *Les démocraties modernes à l’épreuve*. L’Harmattan. Paris.

Poulantzas, Nicos (2013 [1978]). *L’État, le pouvoir, le socialisme*. Les Prairies Ordinaires. Paris.

Przeworski, Adam (1984 [1983]). “Ama a incerteza e serás democrático”. *Novos Estudos*, nº 9, pp. 36-46.

Ribeiro, Pedro Floriano (2010). *Dos sindicatos ao governo: a organização nacional do PT de 1980 a 2005*. Editora UFSCar. São Carlos.

Samuels, David (2004). “From socialism to social democracy: party organization and the transformation of the Workers’ Party in Brazil”. *Comparative Political Studies*, vol. 37, nº 9, pp. 999-1024.

Singer, André (2012). *Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador*. Companhia das Letras. São Paulo.

Singer, André (2016). “A (falta de) base política para o ensaio desenvolvimentista”, en André Singer e Isabel Loureiro (orgs.), *As contradições do lulismo: a que ponto chegamos?* Boitempo. São Paulo.

Terron, Sonia Luiza y Soares, Gláucio Ary Dillon (2010). “As bases eleitorais do PT: do distanciamento ao divórcio”. *Opinião Pública*, vol. 16, nº 2, pp. 310-37.

Vidal-Naquet, Pierre (2002 [2000]). *Os gregos, os historiadores, a democracia: o grande desvio*. Companhia das Letras. São Paulo.